

Que existe en estas actuaciones, copia que hace f6 pública del auto motivado de prision, contra las personas en cuyo favor se há interpuesto este recurso, motivo por el cual, no procede el amparo de la Justicia federal por violacion de la garantía que consigna el artículo 19 constitucional.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 28 de Marzo del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Evaristo Hernandez, José Montero y Tomas Salvador, contra los procedimientos del Juez de 1ª instancia del partido del Centro, que los retiene en prision como presuntos reos de asalto en cuadrilla.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Volasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Agosto de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por el C. Mariano Mendoza, contra una providencia del Conciliador de Zempoala, por la que se dio posesion á Doña Rosa Cruz de un solar ubicado en el barrio de Texcacuac del Municipio de Zempoala, con violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el C. Mariano Mendoza ha interpuesto el recurso de amparo contra los procedimientos del Juez Conciliador de Zempoala, por los cuales ha dado posesion á Doña Rosa Cruz, de un solar ó terreno que el quejoso dice ser de su propiedad, por lo que á su juicio con aquellos procedimientos se violan las garantías de los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal. Pide tambien el quejoso la suspension provisional de los actos reclamados, sobre la cual se pidió informe á la autoridad ejecutora sin que lo haya rendido, y á cuyo punto por lo mismo, debe concretarse por ahora la cuestion.

En la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 en sus artículos 5º y 6º, por la imposibilidad sin duda de dar reglas precisas para calificar la urgencia que justifique la suspension que se solicita, dejó al prudente arbitrio de los jueces estimar las circunstancias de cada caso, y de aquí la necesidad de valorizarlas. Las que en el caso concurren, ademas de no tener otro fundamento que el dicho del quejoso, por la naturaleza de los actos que en el curso relativo se mencionan, no aparece justificado ni menos que sea notoria la urgencia; y mas bien puede deducirse del tenor del mismo escrito, el concepto contrario de que tal urgencia no existe, porque se asegura que á Doña Rosa Cruz se dió ya la posesion reclamada, á cuyo acto no se sabe que sigan

otras que pudieran suspenderse, y porque en el propio escrito se expresa, que el asunto está sujeto á la justicia ordinaria, ante la cual, el quejoso puede promover lo que á su derecho convenga contra la posesion y contra los demas procedimientos del Juez Conciliador de Zempoala; todo lo cual demuestra la falta de urgencia para la suspension solicitada, y en cuyo concepto, el Promotor pide al Juzgado se sirva declarar: que no ha lugar á dicha suspension.

Pachuca, Abril 30 de 1874.—*J. Durán*.

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 10 de 1874.—*F. Briseño*, secretario.

Segundo pedimento fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe alegando en el juicio de amparo promovido por el C. Mariano Mendoza, contra los procedimientos del Conciliador de Zempoala por los que se dió posesion á Doña Rosa Cruz de un solar ubicado en el barrio de Texcacuac del Municipio de Zempoala, y con cuyos actos se han violado en concepto del promovente las garantías consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal, dice: que examinando detenidamente las pruebas rendidas; los informes emitidos por la autoridad responsable, por la municipal de Zempoala y por el Juez de 1ª instancia de este Distrito, resulta: que aunque no puede considerarse enteramente justificada la propiedad del solar en cuestion por parte del quejoso, por no haberse esclarecido cuanto en derecho se requiere la procedencia que se atribuye, sí parece indudable en vista del informe del Juzgado 2º de 1ª instancia de esta Capital, la incompetencia del Conciliador al dictar cualquiera resolucion sobre la cosa que era objeto de un interdicto de despojo, en que el mismo Conciliados aparece como parte. Por esto parece clara en el caso la violacion de la garantía del artículo 16 y no la del 27 de la Constitucion, y por

lo mismo, el sucrito pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Mariano Mendoza, contra los procedimientos reclamados del Conciliador de Zempoala, por violarse en su persona la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion general de la República.

Pachuca, Junio 28 de 1874.—*J. Durán*.

Es copia que certifico. Pachuca, 10 de Julio de 1874.—*F. Briseño*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Julio 2 de 1874.—Resultando de estos autos sobre amparo de garantías, que el C. Mariano Mendoza promovió contra el C. Conciliador de Zempoala.

Primero: que el C. Presidente Municipal de aquella poblacion, entendiendo cumplir con la ley de desamortizacion de 25 de Junio de 1856 y circular de 9 de Octubre del mismo año, adjudicó el 3 de Octubre de 1868 á Doña Rosa Cruz en cuatro pesos ochenta y siete centavos, un terreno situado en el parage llamado Texcacuac, de cuatro mil ochocientas varas cuadradas (fojas 8 cuaderno de pruebas) que el quejoso asegura ser de su propiedad, y cuya adjudicacion ha originado frecuentes cuestiones entre éste y la adjudicataria, quienes alternativamente han sido posesionados y lanzados de él, (fojas 1 cuaderno principal y 8 vuelta y 9 frente cuaderno de pruebas.)

Segundo: que estando todavia pendiente de resolucion ante el Juzgado 2º de letras de esta ciudad, la reclamacion que ante él hizo Mendoza, contra la posesion que en virtud de dicha adjudicacion, dió á la Señora Cruz el C. Conciliador de Zempoala, este funcionario, sin orden de aquel Juzgado, y á pesar de haber el quejoso recobrado quien sabe porque medios la posesion del terreno de que se trata, lo privó de él al parecer sin figura de juicio, y lo entregó á la expresada Cruz, (fojas 10 y 7 cuaderno

principal,) siendo esta última providencia la que motivó el presente recurso, por importar según el quejoso una violación de las garantías que la Constitución general otorga en sus artículos 16 y 27.

Tercero: que en el término de prueba, Mendoza ha justificado su propiedad al solar en cuestión, acreditando haberlo heredado de su padre Miguel Mendoza, quien á su vez lo hubo de Suzano García, el que lo heredó de su padre José Suman García dueño de él desde el año de 1832, (documento de fojas 1 y testimonios de fojas 3 y siguientes; cuaderno de pruebas.)

Cuarto que para hacer la adjudicación de que se ha hecho mérito, no se formó ningún expediente; pues así se desprende del informe del Presidente Municipal (fojas 7 e 63.) lo manifiesta, la forma del título expedido á la Señora Cruz (fojas 8 del mismo cuaderno,) que como se ve no es un testimonio del decreto de adjudicación, sino la adjudicación misma y la confirman los autos que obran en este Juzgado, promovidos por los vecinos de San Gabriel contra una disposición semejante, en los que aparece, que nunca se formaba expediente de las diversas adjudicaciones que la autoridad municipal de Zempoala hacía de los terrenos de repartimiento.

Considerando: 1º que cualquiera que sea el valor que deba darse á las pruebas adelantadas por el quejoso en el presente juicio, para acreditar los derechos de propiedad y posesión que asegura tener sobre el terreno adjudicado, es evidente, que entre él y la Señora Cruz existe una contienda acerca de ellos, en la cual ha sido perjudicado el primero con la adjudicación hecha en favor de la segunda por el C. Municipal supuesto que el C. Conciliador apoyado en ella, ha privado á aquel del terreno expresado para dárselo en posesión á esta.

2º que siendo completamente nula y de ningún valor la adjudicación tantas veces citada, tanto por que en ella no se guardaron absolutamente los términos y formalidades

proscritas por las leyes de desamortización, como por que ni son adjudicables los terrenos de común repartimiento á cualquier denunciante, ni el Presidente Municipal pudo haberla hecho legalmente por prohibírselo expresamente la circular de 12 de Noviembre de 1856; son ilegales é infundados los procedimientos del C. Conciliador contra el quejoso, como emanados de la misma adjudicación, y constituyen por consiguiente un ataque á la garantía del artículo 16 constitucional, y

3º que la inconstitucionalidad de los actos del C. Conciliador, es todavía más palmaria si se tiene presente que estando sometida al Juzgado de letras la resolución del negocio que se contiene entre la Señora Cruz y el Sr. Mendoza, aquel funcionario no puede determinar de propia autoridad cosa alguna sobre el asunto.

Por lo expuesto, y con fundamento de los artículos 16, 101 y 102 de la Constitución, la Justicia federal ampara y protege al C. Mariano Mendoza, contra los procedimientos del C. Conciliador de Zempoala, como ejecutor de la adjudicación hecha por el C. Presidente Municipal, de un terreno en el barrio de Texcacoac á que alude el quejoso, por importar aquellos una violación de la garantía del artículo 16 citado. Y por cuanto á que Mendoza ha justificado debidamente su notoria insolvencia, se declara hallarse en el caso del artículo 29 de la ley de 20 de Enero de 1869. Hágase saber; publíquese, compárense las copias respectivas para el Semanario, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Así sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fe.—*M. Mejía*.—*Francisco Briceño*.

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 6 de 1874.—*F. Briceño*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 21 de 1874. — Visto el juicio de amparo promovido por el C. Mariana Mendoza ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, contra una providencia del Consiliador de Zempoala, por la que se dio posesion á Doña Rosa Cruz de un solar ubicado en el barrio de Texcanac del municipio de Zempoala, con violacion de las garantías consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal; visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas presentadas por el promovente; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito y considerando: que apareciendo de autos que está pendiente ante el Juzgado 2º de 1ª instancia de Pachuca, el juicio de despojo promovido por el quejoso, es notoria la arbitrariedad con que ha procedido el conciliador de Zempoala, al dar posesion del terreno á Doña Rosa Cruz, cuyo acto implica la violacion de las garantías consignadas en el artículo 16 del Pacto federal; que respecto de la violacion del artículo 27 alegado por el quejoso, como no incumbe á este Tribunal el exámen de los títulos de propiedad del promovente, ni de los de la adjudicataria, no existe una base legal para conceder el amparo por este capítulo.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara: 1º es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso. 2º se estraña al mismo C. Juez, tanto por haber calificado en la parte expositiva de su fallo la adjudicacion hecha por el Ayuntamiento de Zempoala, cuanto por haber señalado como causal á la no imposicion de la multa, la circunstancia de ser insolvente el quejoso, estando prevenido por la ley que solo en caso de denegacion de amparo, se imponga dicha multa.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 26 de 1874.—*E. Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por el C. Cándido Rivera, contra la Orden dictada por el Juez de 1ª instancia del ramo criminal del Departamento de Comitán que lo mandó reducir á prision sin expresar la causa del procedimiento.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. José Cándido Rivera, vecino de la ciudad de Comitán con fecha 1º del corriente solicitó amparo y proteccion de la Justicia federal, contra la Orden que el C. Juez de 1ª instancia del ramo criminal de aquel departamento, libró con fecha 21 de Abril próximo pasado para que lo detuviera preso en la cárcel pública de aquella misma ciudad, sin expresar en ella la causa legal del procedimiento, juzgando con esta falta violada la garantía individual que le concede el artículo 16 de la Carta fundamental de la República.

Pedido informe con justificacion á la autoridad responsable, despues de suspendida la providencia reclamada, lo rindió acumulando las primeras diligencias que instruye contra dicho Rivera, á mocion del C. Vicente García, que dice le estaba hurtando ganado vacuno arisco, que andaba en la